



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE TUNJA

Tunja, ocho (8) de octubre dos mil veinte (2020)

Medio de control:	Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado:	15001 33 33 004 2019 00169 00
Demandantes:	Pedro Nel Sotelo Martínez
Demandado:	Municipio de Chiquinquirá - Secretaría de Tránsito

I. ASUNTO

El proceso ingresa al Despacho para efecto de fijar fecha y hora para la celebración de la audiencia inicial de que trata el artículo 180 del CPACA. Sin embargo, por aplicación del Decreto Legislativo 806 de 2020, se adoptarán las decisiones del caso.

II. ANTECEDENTES

Mediante auto de 7 de noviembre de 2019, el Despacho admitió la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por el señor Pedro Nel Sotelo Martínez frente al municipio de Chiquinquirá-Secretaría de Tránsito. Este contestó la demanda, a través de memorial radicado el 9 de marzo de la presente anualidad y, mediante escrito separado, formuló la excepción previa de *“ineptitud de la demanda por indebida acumulación de pretensiones”*, asimismo, propuso las excepciones de mérito que denominó *“...de presunción de legalidad de los actos administrativos demandados”* y *“...de ausencia de prueba que acredite el perjuicio”*

Durante el curso de esta actuación, mediante la Resolución N° 385 de 12 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social decretó Emergencia Sanitaria en todo el territorio nacional, con el fin de prevenir y controlar la propagación del COVID 19 y mitigar sus efectos, y el Consejo Superior de la Judicatura, mediante los Acuerdos PCSJA20-11517, PCSJA20-11518, PCSJA20-11519, PCSJA20-11521, PCSJA20-11526, PCSJA20-11527, PCSJA20-11528, PCSJA20-11529, PCSJA20-11532, PCSJA20-11546, PCSJA20-11549, PCSJA20-11556 y PCSJA20-11567 de 2020 suspendió los términos judiciales entre el 16 de marzo y el 30 de junio de 2020. Es decir, que el levantamiento de la suspensión de términos judiciales operó a partir del día 1.º de julio de 2020, mediante la adopción de medidas pertinentes para la reanudación de la atención al público, el normal funcionamiento de los despachos judiciales y de otras medidas de salubridad pública y fuerza mayor. Medida ratificada mediante Acuerdo PCSJA20-11581 de 27 de junio de 2020.

Por su parte, a través del Decreto Legislativo N° 806 de 04 de junio 2020, el Gobierno Nacional adoptó unas medidas de orden procesal para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.

Así las cosas, una vez reanudados los términos, se corrió el traslado de las excepciones, conforme lo dispone el parágrafo 2.º del artículo 175 del CPACA, entre el 21 y el 25 de agosto de 2020, oportunidad dentro de la cual la parte actora no efectuó pronunciamiento.

III. CONSIDERACIONES

a. De las excepciones

En esta fase procesal, con sujeción al principio general de aplicación inmediata de las leyes procesales¹, el presente asunto debe tramitarse al tenor de lo dispuesto en el Decreto 806 de 2020², que dispone la resolución de las excepciones previas y mixtas, según la regulación de los artículos 100, 101 y 102 del CPG. En consecuencia, el Despacho deberá resolver antes de la audiencia inicial las excepciones previas contenidas en el artículo 100 del CGP³ y aquellas mixtas consagradas en el numeral 6.º del artículo 180 de CPACA⁴, cuando no requieran la práctica de pruebas.

En este entendido, el Despacho procederá a pronunciarse sobre la excepción de ineptitud de la demanda por indebida acumulación de pretensiones propuesta por municipio de Chiquinquirá, así:

- De la ineptitud de la demanda por indebida acumulación de pretensiones

El apoderado del municipio de Chiquinquirá señaló que la parte accionante interpuso el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en procura de lograr la nulidad de la Resolución 3456 de 2018, emanada de la Secretarí de Tránsito y Transporte de Chiquinquirá, y de obtener el pago de perjuicios materiales, consistentes en el valor de la multa impuesta y la suma pagada por concepto de honorarios al abogado para su defensa. Así las cosas, afirmó que el pago de los honorarios de su representante judicial es una

¹ Código General del Proceso. Artículo 624. *Modifíquese el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual quedará así:*

“Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir.

Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtir las notificaciones.

La competencia para tramitar el proceso se regirá por la legislación vigente en el momento de formulación de la demanda con que se promueva, salvo que la ley elimine dicha autoridad”.

² Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.

³ “1. Falta de jurisdicción o de competencia.

2. Compromiso o cláusula compromisoria.

3. Inexistencia del demandante o del demandado.

4. Incapacidad o indebida representación del demandante o del demandado.

5. Ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales o por indebida acumulación de pretensiones.

6. No haberse presentado prueba de la calidad de heredero, cónyuge o compañero permanente, curador de bienes, administrador de comunidad, albacea y en general de la calidad en que actúe el demandante o se cite al demandado, cuando a ello hubiere lugar.

7. Habérsele dado a la demanda el trámite de un proceso diferente al que corresponde.

8. Pleito pendiente entre las mismas partes y sobre el mismo asunto.

9. No comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios.

10. No haberse ordenado la citación de otras personas que la ley dispone citar.

11. Haberse notificado el auto admisorio de la demanda a persona distinta de la que fue demandada.”

⁴ “cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta de legitimación en la causa y prescripción extintiva”

pretensión que no obedece a la naturaleza del asunto bajo estudio, pues estos no se originaron en la expedición del acto administrativo acusado; luego, la misma no podía acumularse en el escrito de demanda. Adicionalmente, que de la demanda se extrae que el valor de la multa impuesta, mediante al acto acusado, ascendió a \$37.499.700, pero dicha suma se deprecó a título de daño material, pretensión que se opone a la contenida en el ordinal 4.2, comoquiera que en esta solicitó el pago de la misma cantidad por concepto de daños materiales.

Al respecto, este Despacho precisa que, en aplicación del mandato constitucional que impone la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal⁵, el juez se encuentra llamado a interpretar los términos del libelo inicial integralmente, respetando la *causa petendi* que en el presente asunto, conforme al cuerpo de la demanda⁶, no es otra que declarar la nulidad de los actos administrativos que se describen a continuación:

- Resolución N.º 3455 de 06 de noviembre de 2019, mediante la cual se declaró al demandante contraventor por incurrir en la infracción F de la Ley 1696 de 2013 y, en consecuencia, impuso sanción consistente en multa de \$37.499.700.
- Resolución N.º 3456 de 06 de noviembre de 2019, por medio de la cual se canceló la licencia de conducción del señor Pedro Nel Sotelo Martínez.
- Resolución N.º 337 de 29 de abril de 2019, proferida por el alcalde municipal de Chiquinquirá, que confirmó y ratificó la Resolución N.º 3445 de 06 de noviembre de 2016.

En consecuencia, el restablecimiento del derecho eventualmente se concretaría en que el accionante recupere su licencia de conducción y sea exonerado del pago de la multa, declaraciones que si bien no se plasmaron con suficiente claridad, dado que se hizo referencia a la revocatoria de los actos y a la expedición de otra decisión administrativa, se encuentran inmersas en las pretensiones 4 y 5 del acápite de declaraciones y condenas.

En tal sentido conviene señalar que, el Consejo de Estado⁷ ha estimado que dentro de las facultades que le son otorgadas al operador judicial está la de la interpretación de la demanda, en la medida que las condiciones procesales así se lo permitan, con el objeto de garantizar el acceso a la administración de justicia a través del estudio de los cargos planteados por el actor, evitándose así fallos inhibitorios.

Ahora, la parte demandante, a título de restablecimiento del derecho, también solicitó el pago de perjuicios morales por la suma de 100 SMLMV, así como de los perjuicios materiales por un total de \$52.499.700, monto compuesto por el valor de la multa impuesta y el valor pagado por concepto de honorarios del abogado. Frente a estas pretensiones es preciso recordar que, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 138 del CPACA, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, se podrá pretender la nulidad del acto administrativo que presuntamente lesiona derechos subjetivos, **se restablezca el derecho y, de ser el caso, se reparare el daño causado.**

⁵ Art. 228 de la Constitución Política.

⁶ Al momento de subsanar la demanda, la parte demandante presentó nuevamente todo el escrito introductorio (fs. 127 - 136)

⁷ Sentencia de 12 de julio de 2018. Radicación número: 25000-23-24-000-2010-00103-01. C.P. Alberto Yepes Barreiro.

Este aspecto fue analizado por el Consejo de Estado⁸ indicando que las condenas a título de restablecimiento del derecho pueden ser de tipo indemnizatorio, inclusive, en algunas oportunidades, al no ser posible un restablecimiento al estado anterior de la expedición de los actos administrativos, que es procedente indemnizar a título de daño emergente o lucro cesante. *“En este orden de ideas, las partes pueden reclamar la reparación de otros daños, en cuyo caso se deberá ejercitar la carga de la prueba, so pena de que no se decreten dichas condenas.”*

De acuerdo a lo expuesto, a juicio de este Despacho, la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda por indebida acumulación de pretensiones propuesta por la entidad demandada no está llamada a prosperar, ya que el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho permite reclamar, además del restablecimiento del derecho propio de la anulación del acto acusado, los perjuicios que se hayan ocasionado con su expedición, en tal sentido no se advierte la existencia de circunstancia alguna que impida a este estrado judicial, pronunciarse respecto a las pretensiones que demanda el actor.

b. Del decreto de pruebas

El artículo 13 del Decreto 806 del 4 de junio de 2020 establece la posibilidad de dictar sentencia anticipada cuando se trate de asuntos de puro derecho o que no fuere necesario practicar pruebas, *“caso en el cual correrá traslado para alegar por escrito, en la forma prevista en el inciso final del artículo 181 de la Ley 1437 de 2011 y la sentencia se proferirá por escrito”*. Por tanto, corresponde al Despacho decidir sobre el decreto de las pruebas solicitadas y aportadas por las partes en la demanda y sus contestaciones, en los siguientes términos:

1. Parte demandante

Pruebas aportadas

Con el valor probatorio que les confiere la ley, téngase como pruebas documentales las aportadas con la demanda, visibles a folios 15 a 118 del expediente, las cuales consisten en:

- Copias simples del proceso administrativo de la orden de comparendo N.º 15176000000020229225 de fecha 6 de junio de 2018, infracción “F”.
- DVD que contiene el video del agente de tránsito que impuso el referido comparendo.

De otra parte, se advierte que en el acápite de pruebas de la demanda se relacionó como prueba el recibo de pago de los honorarios profesionales, sin embargo, revisados tanto los documentos allegados físicamente como los remitidos en medio magnético (f. 139), se encuentra que el mismo no fue aportado; luego, no es posible tenerlo como elemento de convicción.

Pruebas solicitadas: No solicitó pruebas

⁸ Sentencia de 8 de febrero de 2018. Radicación número: 76001-23-31-000-2011-00281-02(21082). C. P Julio Roberto Piza Rodríguez

2. Municipio de Chiquinquirá- Secretaría de Tránsito

Pruebas aportadas

Con el valor probatorio que les confiere la ley, téngase como prueba documental la aportada con la contestación, consistente en copia auténtica el proceso administrativo sancionatorio tramitado por la Secretaría de Transito de Chiquinquirá, con ocasión de la orden de comparendo 1517600000020229225, incluido DVD en el que obra video del momento en que se impuso el mentado comparendo (fs. 168-314).

Pruebas solicitadas: No solicitó pruebas

c. Aplicación del Decreto Legislativo 806 de 2020

En virtud de lo dispuesto en el Decreto Legislativo 806 de 2020, las partes y demás sujetos procesales deberán realizar todas las actuaciones a través de medios tecnológicos, y enviar un ejemplar de todos los memoriales en formato PDF o actuaciones que realicen a todos los extremos procesales, **simultáneamente** con copia incorporada al mensaje enviado al Despacho, a través de los canales digitales que a continuación se señalan, según la información que reposa en el proceso:

Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Tunja	correspondenciajadmtun@cendoj.ramajudicial.gov.co	
Ministerio Público	procjudadm177@procuraduria.gov.co	
Parte demandante	elkin_silva.abo@hotmail.com	
Municipio de Chiquinquirá	notificacionjudicial@chiquinquira-boyaca.gov.co secretariagobierno@chiquinquira-boyaca.gov.co	y

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Tunja

RESUELVE

PRIMERO.- Declarar no probada la excepción de ineptitud de la demanda por indebida acumulación de pretensiones propuesta por el municipio de Chiquinquirá- Secretaría de Tránsito.

SEGUNDO.- Incorporar con el valor legal que corresponda los documentos aportados con la demanda y su contestación.

TERCERO.- Advertir a las partes y demás sujetos procesales que, al tenor de lo dispuesto en el Decreto 806 de 2020, deberán enviar un ejemplar de todos los memoriales en formato PDF o actuaciones que realicen, **simultáneamente** con copia incorporada al mensaje enviado al Despacho, a través de los canales digitales reseñados en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO.- Reconocer personería al abogado José Luis Suarez Parra, identificado con C.C. 1.053.325.334 y T.P. 189. 974 del C. S. de la J., para actuar como apoderado del municipio de Chiquinquirá, en los términos y para los efectos del poder visible a folio157 del expediente.

QUINTO.- Una vez en firme la presente decisión, el asunto pasará al Despacho para disponer el trámite procesal que legalmente corresponda.

Notifíquese⁹ y cúmplase

Firmado Por:

ANGELA MARIA JOJOA VELASQUEZ
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 004 ADMINISTRATIVO DE TUNJA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

a7706d9ccbe0f53ed9286710deca714c85abc305a463080849023c13ac8626d8

Documento generado en 08/10/2020 04:11:30 p.m.

NOTIFICACIÓN POR ESTADO

La anterior providencia se notifica por
estado electrónico N.º 31
de hoy 9 de octubre de 2020, a las 8:00 a. m.

FERNEY MAURICIO DÍAZ HERNÁNDEZ
Secretario

CZ